Proyecto de Ley N° 7563/2023-CR

CONGRESO
REPÚBLICA

PASIÓN NEOMIAS DÁVILA ATANACIO
Congresista de la República

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
11 ABR. 2024
RECIBIDO
Firma: Hora: 8:37

PROYECTO DE LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA COMPENSACIÓN A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS POR DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA Y DE HIDROCARBUROS

El grupo parlamentario **Bloque Magisterial de Concertación Nacional**, a iniciativa del congresista que suscribe, **PASIÓN NEOMIAS DÁVILA ATANACIO**, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, y de conformidad con los artículos 22 literal c), 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, propone el siguiente PROYECTO DE LEY:

FÓRMULA LEGAL

LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA COMPENSACIÓN A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS POR DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA Y DE HIDROCARBUROS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley

El presente proyecto de ley tiene como objetivo establecer un marco legal para la compensación a las comunidades campesinas y comunidades nativas por los daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos.

Artículo 2. Definiciones

Para efectos de la presente Ley, se establecen las siguientes definiciones:

a) **Comunidades Campesinas:** Se refiere a las organizaciones comunales de carácter rural, reconocidas como tales de acuerdo a la legislación vigente.

b) **Comunidades Nativas:** Se refiere a las organizaciones comunales de carácter indígena, reconocidas como tales de acuerdo a la legislación vigente.

c) **Daños Ambientales:** Se refiere a los impactos negativos causados al medio ambiente, incluyendo la contaminación del suelo, agua y aire, la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

d) **Actividad Minera y de Hidrocarburos:** Se refiere a las actividades de exploración, explotación, procesamiento y transporte de minerales e hidrocarburos.

CAPÍTULO II
COMPENSACIÓN A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS

Artículo 3. Derecho a la compensación

3.1. Las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas tienen derecho a recibir una compensación justa y equitativa por los daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos en sus territorios.

3.2. Las empresas mineras y de hidrocarburos que operen en el territorio nacional estarán obligadas a compensar económicamente a las comunidades campesinas y comunidades nativas por los daños ambientales causados por su actividad.

3.3. La compensación económica deberá ser proporcional a la magnitud de los daños ambientales y se determinará mediante un estudio técnico realizado por expertos independientes.

3.4. La compensación económica podrá ser utilizada por las comunidades campesinas y comunidades nativas para la restauración del medio ambiente, el desarrollo de proyectos sostenibles y la mejora de la calidad de vida de sus miembros.

Artículo 4. Responsabilidad de las empresas

Las empresas mineras y de hidrocarburos son responsables de los daños ambientales causados por su actividad y deberán compensar a las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas de acuerdo a lo establecido en la presente ley.

Artículo 5. Financiamiento para la remediación

Las empresas mineras y de hidrocarburos deberán destinar un porcentaje de sus ingresos para financiar la remediación de las áreas afectadas por su actividad, con el objetivo de reducir y/o eliminar los impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema circundante y la propiedad.

Artículo 6. Financiamiento y creación de un Fondo de Compensación

Los recursos para la compensación a las comunidades campesinas y comunidades nativas por los daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos

serán provistos por las empresas del sector, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

Se crea el Fondo de Compensación para las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, el cual será administrado por una entidad designada por el Estado. Este fondo se financiará con los recursos provenientes de las empresas mineras y de hidrocarburos, así como con otros recursos que se destinen para tal fin.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIÓN

Artículo 7. Evaluación de los daños ambientales

Se establece el siguiente procedimiento para la evaluación de los daños ambientales causados por actividades mineras y de hidrocarburos en los territorios de las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas.

a) **Evaluación de Daños:** Se ejecutará una evaluación de los daños medioambientales ocasionados. Esta evaluación estará a cargo de expertos independientes, quienes serán designados por el Estado.

b) **Solicitud de Compensación**: Las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas que se hayan visto afectadas por estos daños tienen el derecho de presentar una solicitud de compensación. Tal pedido se hará ante el Ministerio de Energía y Minas.

c) **Evaluación de las Solicitudes**: El Ministerio de Energía y Minas tiene la responsabilidad de examinar las solicitudes de compensación, y estará a cargo de coordinar con las empresas mineras y de hidrocarburos para garantizar que la compensación sea justa y se dé efectivamente.

d) **Resolución de Controversias**: Si surge un desacuerdo entre las partes en relación con la solicitud de compensación o su cumplimiento, se establecerá un mecanismo de mediación y arbitraje. Este mecanismo será responsable de resolver las controversias de manera justa y oportuna.

Artículo 8. Determinación de la compensación

Una vez evaluados los daños ambientales, se determinará el monto de la compensación a ser otorgada a las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas, tomando en cuenta los impactos negativos a la salud de la población, al ecosistema circundante y la propiedad.

Artículo 9. Procedimiento de pago de la compensación

El pago de la compensación se realizará de manera oportuna y transparente, garantizando la participación de las Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas en el proceso.

Se establecerán mecanismos para asegurar que los recursos destinados a la compensación sean utilizados de manera adecuada y en beneficio de las comunidades afectadas.

Artículo 10. Sanciones

Las empresas mineras y de hidrocarburos que no cumplan con la obligación de compensar a las comunidades campesinas y comunidades nativas por los daños ambientales serán sancionadas con multas y podrán ser sujetas a la suspensión o revocación de sus licencias de operación.

Las comunidades campesinas y comunidades nativas que presenten solicitudes de compensación falsas o fraudulentas serán sancionadas de acuerdo a la legislación vigente.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Reglamentación

El Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de la publicación de la presente Ley, emitirán las disposiciones reglamentarias necesarias para su implementación.

SEGUNDA. Derogatoria

Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a lo establecido en la presente ley.

Lima, once de abril del año dos mil veinticuatro

CONGRESISTAS

PERÚ
CONGRESO de la REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, **16** de **abril** de **2024**

Según la consulta realizada, de conformidad con el Artículo 77° del Reglamento del Congreso de la República: pase la Proposición **N° 7563/2023-CR** para su estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de:

1. **ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA; Y**
2. **ENERGÍA Y MINAS.**

GIOVANNI FORNO FLOREZ
Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE LEY PARA LA REGULACIÓN DE LA COMPENSACIÓN A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS Y COMUNIDADES NATIVAS POR DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS POR LA ACTIVIDAD MINERA Y DE HIDROCARBUROS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

Descripción del problema

El proyecto de ley para la regulación de la compensación a las comunidades campesinas y comunidades nativas por daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos en el Perú busca abordar varias problemáticas importantes:

La actividad minera y de hidrocarburos puede causar daños significativos al medio ambiente, incluyendo la contaminación del agua, la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad. Estos daños pueden tener un impacto negativo en la calidad de vida de las comunidades locales y en la sostenibilidad de los ecosistemas locales.

Perú: comunidades envenenadas por la minería en Cerro de Pasco exigen que se les atienda

por Dan Collyns en 11 enero 2024 | Translated by Yolanda Álvarez



Fuente: Mongabababay.

En efecto, tal como se muestra en la imagen anterior, las comunidades campesinas y nativas a menudo viven en áreas cercanas a las operaciones mineras y de hidrocarburos y son particularmente vulnerables a los impactos ambientales de estas actividades. Esto puede afectar su salud, su acceso a recursos naturales y su capacidad para mantener sus medios de vida tradicionales.

Hasta la fecha, la acción del gobierno para abordar la contaminación en Cerro de Pasco ha sido inconsistente[1]. A pesar de los daños causados, en la actualidad no existe una regulación clara y efectiva que garantice una compensación justa y adecuada para las comunidades afectadas por los daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos.

Sin una obligación legal de compensar los daños ambientales, las empresas mineras y de hidrocarburos pueden no tener suficientes incentivos para adoptar prácticas más sostenibles y minimizar los impactos negativos de sus operaciones.

Derrame de petróleo en río de Amazonía de Perú afecta a comunidades nativas

18 septiembre, 2022



Fuente: Noticias ambientales.

En aquella vez, el derrame afecta a seis comunidades nativas amazónicas Kukamas de la quebrada Cuninico, cuyos dirigentes denunciaron a la prensa que el río se encuentra contaminado.

[1] https://es.mongabay.com/2024/01/peru-comunidades-envenenadas-por-mineria-cerro-de-pasco/. Consultado 15 de febrero de 2024.

Por lo que, este proyecto de ley busca abordar la problemática de los daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos, el impacto en las comunidades campesinas y nativas, la falta de compensación justa y los incentivos insuficientes para la sostenibilidad. Al regular la compensación a las comunidades afectadas, se espera que se pueda mitigar estos problemas y promover la justicia ambiental y la sostenibilidad en la actividad minera y de hidrocarburos en el Perú.

La actividad minera y de hidrocarburos es una fuente importante de ingresos para el país, sin embargo, también puede tener impactos negativos significativos en el medio ambiente y en las comunidades locales. La contaminación del agua, la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y los efectos en la salud de las personas son algunos de los problemas asociados con estas actividades.

Las comunidades campesinas y nativas, que a menudo viven en áreas cercanas a las operaciones mineras y de hidrocarburos, son particularmente vulnerables a estos impactos. A pesar de esto, en la actualidad no existe una regulación clara y efectiva que garantice una compensación justa y adecuada para estas comunidades por los daños ambientales causados.

La República

Loreto: 56 comunidades nativas siguen en pie de lucha por derrame de petróleo

El vertido de hidrocarburos en el kilómetro 56 del Oleoducto Nororiental no solo está afectando la salud e integridad de los ciudadanos, sino también los ecosistemas. "Estamos tomando agua contaminada", dice el apu Gilberto Inuma.

- Alcalde de San Juan de Lurigancho es víctima de extorsión: "Están juntando S/30.000 ...
- Estas son las 7 nuevas carreras profesionales de la Universidad San Marcos: ¿ya se pu...



Este proyecto de ley busca llenar este vacío legal y garantizar que las comunidades afectadas reciban una compensación justa por los daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos. Esta

compensación no solo es una cuestión de justicia, sino que también es esencial para garantizar la sostenibilidad de estas comunidades y su capacidad para continuar viviendo y trabajando en sus tierras.

Además, este proyecto de ley busca incentivar a las empresas mineras y de hidrocarburos a adoptar prácticas más sostenibles y a minimizar los impactos negativos de sus operaciones en el medio ambiente y en las comunidades locales. Al establecer una obligación legal de compensar los daños ambientales, se espera que las empresas tomen medidas proactivas para prevenir estos daños y reducir su impacto.

Este proyecto de ley es esencial para proteger los derechos de las comunidades campesinas y nativas, garantizar la justicia ambiental y promover la sostenibilidad en la actividad minera y de hidrocarburos en el Perú. Por lo tanto, solicitamos su apoyo para la aprobación de este importante proyecto de ley.

Necesidad, viabilidad y oportunidad del proyecto de ley

El proyecto de ley para la regulación de la compensación a las comunidades campesinas y comunidades nativas por daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos en el Perú responde a una necesidad urgente y evidente en el país. A continuación, se describen la necesidad, la viabilidad y la oportunidad de este proyecto de ley:

Existe una clara necesidad de establecer un marco legal que garantice la compensación justa y adecuada a las comunidades campesinas y nativas afectadas por los daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos. Actualmente, estas comunidades enfrentan dificultades para acceder a la justicia y obtener una compensación adecuada por los impactos negativos en su entorno y en su calidad de vida.

La regulación de la compensación a las comunidades afectadas es viable desde el punto de vista técnico y legal. Existen precedentes internacionales y nacionales que respaldan la implementación de mecanismos de compensación en casos similares. Además, el Estado peruano tiene la capacidad de establecer y hacer cumplir las regulaciones necesarias para garantizar la compensación justa y adecuada.

El proyecto de ley se presenta en un momento oportuno, ya que el Perú ha experimentado un crecimiento significativo en la actividad minera y de hidrocarburos en los últimos años. Este crecimiento ha llevado consigo un aumento en los impactos ambientales y sociales negativos. Por lo tanto, es crucial abordar esta problemática y establecer mecanismos de compensación que promuevan la justicia ambiental y la sostenibilidad en el sector.

Por otra parte, el proyecto de ley para la regulación de la compensación a las comunidades campesinas y comunidades nativas por daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos en el Perú es necesario, viable y oportuno. Su implementación permitirá garantizar la justicia ambiental, proteger los derechos de las comunidades afectadas y promover la sostenibilidad en el sector extractivo del país.

II. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La vigencia de la norma sobre la regulación de la compensación a las comunidades campesinas y comunidades nativas por daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos en el Perú tendría varios efectos significativos en la legislación nacional.

Con la presente se busca establecer un marco legal claro y específico para garantizar la protección de los derechos de las comunidades campesinas y comunidades nativas afectadas por los daños ambientales. Esto incluiría el derecho a una compensación justa y adecuada por los impactos negativos causados por la actividad minera y de hidrocarburos.

Asimismo, se plantea mecanismos y procedimientos necesarios para determinar y otorgar la compensación a las comunidades afectadas. Esto incluiría la evaluación de los daños ambientales, la valoración de los impactos en la calidad de vida de las comunidades y la determinación de la compensación económica o medidas de reparación adecuadas.

Del mismo modo, se establece claramente la responsabilidad de las empresas mineras y de hidrocarburos en la compensación de los daños ambientales causados. Esto implicaría que las empresas serían legalmente obligadas a asumir los costos de la compensación y a implementar medidas para prevenir y mitigar los impactos negativos en el futuro.

Por otra parte, la futura norma promovería la coordinación entre diferentes entidades estatales, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y los organismos encargados de la regulación y supervisión de la actividad minera y de hidrocarburos. Esto permitiría una aplicación efectiva de la norma y una mayor eficiencia en la protección de los derechos de las comunidades afectadas.

Complementariamente, la norma fomentaría la sostenibilidad en el sector extractivo al establecer mecanismos de compensación que promuevan la reparación de los daños ambientales y la adopción de prácticas más responsables

por parte de las empresas. Esto contribuiría a la protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible de las comunidades y del país en general.

En resumen, la vigencia de la norma sobre la regulación de la compensación a las comunidades campesinas y comunidades nativas por daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos en el Perú tendría un impacto significativo en la legislación nacional. Esta norma garantizaría la protección de los derechos de las comunidades afectadas, establecería mecanismos de compensación justos y adecuados, responsabilizaría a las empresas extractivas, promovería la coordinación entre entidades estatales y fomentaría la sostenibilidad en el sector extractivo.

III. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA

A continuación, se presenta un análisis de los costos y beneficios asociados al proyecto de ley:

3. 1. Costos

Costos	Sustento
Costos de implementación	La aplicación de la ley requerirá fondos para establecer mecanismos de compensación, capacitar al personal encargado de su aplicación y supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas extractivas.
Costos de compensación	La ley obligará a las empresas mineras y de hidrocarburos a pagar a las comunidades que sufrieron daños ambientales. Estos gastos se relacionarán con la evaluación de los daños, la determinación de la compensación adecuada y el pago a las comunidades.

3.2. Beneficios

Beneficios	Sustento
Protección de los derechos de las comunidades	El proyecto de ley protegerá los derechos de las comunidades campesinas y nativas que

	han sido afectadas por los daños ambientales. Esto incluirá el derecho a una compensación justa y adecuada, lo que mejorará la calidad de vida y el bienestar de las personas.
Prevención de daños ambientales futuros	Para prevenir y reducir los efectos negativos de la actividad minera y de hidrocarburos en el medio ambiente, la ley establecerá medidas y regulaciones más estrictas. Esto ayudará a evitar daños ambientales futuros y animará a las empresas extractivas a adoptar prácticas más éticas.
Desarrollo sostenible	La compensación a las comunidades afectadas ayudará a mejorar el desarrollo sostenible de las zonas donde se realiza la minería y la extracción de hidrocarburos. La mejora de la infraestructura local, el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y la promoción de actividades económicas sostenibles son algunos de los pasos que se llevarán a cabo.
Mejora de la imagen del país	La reputación del país a nivel nacional e internacional se mejorará al implementar una legislación que proteja los derechos de las comunidades y promueva la sostenibilidad en el sector extractivo. Esto tiene el potencial de atraer inversiones éticas y fomentar el progreso económico sostenible.

En tal sentido, el proyecto de ley para la regulación de la compensación a las comunidades campesinas y comunidades nativas por daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos en el Perú tiene costos asociados a su implementación y compensación, pero también ofrece beneficios significativos en términos de protección de los derechos de las comunidades, prevención de daños ambientales futuros, desarrollo sostenible y mejora de la imagen del país.

IV. RELACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y LAS POLÍTICAS DE ESTADO EXPRESADAS EN EL ACUERDO NACIONAL

La presente iniciativa se encuentra relacionada con la Décima Novena Política de Estado denominada **"Desarrollo sostenible y gestión ambiental"**, que establece lo siguiente: *"...el Estado: (a) fortalecerá la institucionalidad de la*

gestión ambiental optimizando la coordinación entre la sociedad civil, la autoridad ambiental nacional, las sectoriales y los niveles de gestión descentralizada, en el marco de un sistema nacional de gestión ambiental; (b) promoverá la participación responsable e informada del sector privado y de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales y en la vigilancia de su cumplimiento, y fomentará una mayor conciencia ambiental; (c) promoverá el ordenamiento territorial, el manejo de cuencas, bosques y zonas marino costeras así como la recuperación de ambientes degradados, considerando la vulnerabilidad del territorio; (d) impulsará la aplicación de instrumentos de gestión ambiental, privilegiando los de prevención y producción limpias; (e) incorporará en las cuentas nacionales la valoración de la oferta de los recursos naturales y ambientales, la degradación ambiental y la internalización de los costos ambientales; (f) estimulará la inversión ambiental y la transferencia de tecnología para la generación de actividades industriales, mineras, de transporte, de saneamiento y de energía más limpias y competitivas, así como del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, la biotecnología, el biocomercio y el turismo; (g) promoverá y evaluará permanentemente el uso eficiente, la preservación y conservación del suelo, subsuelo, agua y aire, evitando las externalidades ambientales negativas; (h) reconocerá y defenderá el conocimiento y la cultura tradicionales indígenas, regulando su protección y registro, el acceso y la distribución de beneficios de los recursos genéticos; (i) promoverá el ordenamiento urbano, así como el manejo integrado de residuos urbanos e industriales que estimule su reducción, reuso y reciclaje; (j) fortalecerá la educación y la investigación ambiental; (k) implementará el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para asegurar la participación ciudadana, la coordinación multisectorial y el cumplimiento de las empresas de los criterios y condiciones de protección ambiental; (l) regulará la eliminación de la contaminación sonora; (m) cumplirá los tratados internacionales en materia de gestión ambiental, así como facilitará la participación y el apoyo de la cooperación internacional para recuperar y mantener el equilibrio ecológico; y (n) desarrollará la Estrategia Nacional de Comercio y Ambiente."

Asimismo, el proyecto de ley se encuentra directamente vinculada con la Vigésima Octava Política de Estado denominada **"Plena vigencia de la Constitución y de los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial"**, que señala lo siguiente: *"...el Estado: (a) promoverá la institucionalización de un Sistema de Administración de Justicia, respetando la independencia, la autonomía y el presupuesto del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, dentro de un proceso de modernización y descentralización del Estado al servicio del ciudadano; (b) promoverá la designación transparente de las autoridades judiciales, así como su valorización y permanente capacitación; (c) promoverá entre la justicia comunal y el Poder Judicial una relación que respete la interculturalidad y regulará las competencias, atribuciones y limitaciones de aquélla; (d) consolidará la regulación de la justicia de paz y la elección popular de los jueces de paz; (e) difundirá la*

conciliación, la mediación, el arbitraje y en general los mecanismos alternativos de resolución de conflictos; (f) adoptará medidas legales y administrativas para garantizar la vigencia y difusión de la Constitución, afianzará el respeto irrestricto de los derechos humanos y asegurará la sanción a los responsables de su violación; (g) establecerá mecanismos de vigilancia al correcto funcionamiento de la administración de justicia, al respeto de los derechos humanos, así como para la erradicación de la corrupción judicial en coordinación con la sociedad civil; (h) garantizará la cobertura nacional y el mejor funcionamiento de la Defensoría del Pueblo; e (i) fortalecerá las instancias de control interno de los órganos jurisdiccionales."

Del mismo modo, se encuentra relacionada con la Décima Primera Política de Estado denominada **"Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación"**, que establece lo siguiente: *"...el Estado: (a) combatirá toda forma de discriminación, promoviendo la igualdad de oportunidades; (b) fortalecerá la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos que dialogan y conciertan con el Estado y la sociedad civil; (c) fortalecerá una institución al más alto nivel del Estado en su rol rector de políticas y programas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, es decir, equidad de género; (d) dará acceso equitativo a las mujeres a recursos productivos y empleo; (e) desarrollará sistemas que permitan proteger a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres responsables de hogar, personas desprovistas de sustento, personas con discapacidad y otras personas discriminadas o excluidas; y (f) promoverá y protegerá los derechos de los integrantes de las comunidades étnicas discriminadas, impulsando programas de desarrollo social que los favorezcan integralmente."*

Asi también, se encuentra relacionada con la Trigésimo Segunda Política de Estado denominada **"Gestión del riesgo de desastres"**, que establece lo siguiente: *"...el Estado: (a) Fortalecerá la institucionalidad de la Gestión del Riesgo de Desastres a través de un Sistema Nacional integrado y descentralizado, conformado por los tres niveles de gobierno, con la participación de la sociedad civil y conducido por un Ente Rector; (b) Asignará los recursos destinados a la implementación de los procesos de la gestión del riesgo de desastres, a través de la gestión por resultados y los programas presupuestales estratégicos; (c) Priorizará y orientará las políticas de estimación y reducción del riesgo de desastres en concordancia con los objetivos del desarrollo nacional contemplados en los planes, políticas y proyectos de desarrollo de todos los niveles de gobierno; (d) Fomentará la reducción del riesgo de desastres tomando en consideración que la expansión de ciudades y la densificación de la población se debe adaptar al cambio climático, ubicando los proyectos de desarrollo en zonas en las de menor peligro según los estudios de microzonificación multiamenaza; (e) Estará preparado para la atención de emergencias de manera oportuna y eficaz, priorizando a las poblaciones en situación de vulnerabilidad y estandarizando los*

protocolos y procedimientos de primera respuesta a emergencias y desastres; (f) Implementará planes de rehabilitación y reconstrucción de manera eficaz y oportuna; (g) Promoverá la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional; (h) Fomentará el desarrollo y uso de la ciencia y la tecnología para la investigación de la fenomenología y el monitoreo de los eventos naturales e inducidos por la actividad humana que afectan al país; (i) Desarrollará en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional programas y proyectos de educación preventiva frente a los riesgos, dentro del marco de un enfoque de sostenibilidad ambiental; (j) Promoverá el uso de tecnologías adecuadas para la prevención de desastres, con énfasis en la reducción de vulnerabilidades, facilitando el apoyo de la cooperación internacional para viabilizar los proyectos generados por estas tecnologías; (k) Difundirá la normatividad y acciones de la gestión del riesgo de desastres, promoviendo la participación de los medios de comunicación masiva; (l) Velará por el cumplimiento de los acuerdos internacionales aprobados por el Estado Peruano en materia de Gestión del Riesgo de Desastres; (m) Considerará la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) y el Marco de Acción de Hyogo, acordadas en el seno de las Naciones Unidas (ONU) y las Estrategias Andinas para la Prevención y Atención de Desastres que acuerde el Comité Andino de Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)."

Finalmente, se encuentra relacionada con la Trigésima Tercera Política de Estado denominada **"Política de Estado sobre los recursos hídricos"**, que establece lo siguiente: *"...el Estado: (a) dará prioridad al abastecimiento de agua en cantidad, calidad y oportunidad idóneas, a nivel nacional, para consumo humano y para la seguridad alimentaria en el marco de la décimo quinta política de Estado del Acuerdo Nacional; (b) asegurará el acceso universal al agua potable y saneamiento a las poblaciones urbanas y rurales de manera adecuada y diferenciada, con un marco institucional que garantice la viabilidad y sostenibilidad del acceso, promoviendo la inversión pública, privada y asociada, con visión territorial y de cuenca, que garantice la eficiencia en la prestación de los servicios, con transparencia, regulación, fiscalización y rendición de cuentas; (c) garantizará la gestión integrada de los recursos hídricos, con soporte técnico, participación institucional y a nivel multisectorial, para lograr su uso racional, apropiado, equitativo, sostenible, que respete los ecosistemas, tome en cuenta el cambio climático y promueva el desarrollo económico, social, y ambiental del país y la convivencia social; (d) protegerá el equilibrio del ciclo hidrológico y la calidad de los cuerpos de agua, teniendo en cuenta: la interdependencia de los distintos estados del agua y de los componentes del ciclo hidrológico, que la cuenca es la unidad de manejo del agua, y que el uso de la tierra y las actividades humanas impactan dicho ciclo, por lo que deben manejarse en conjunto considerando sus peculiaridades según las regiones fisiográficas y eco climáticas del país; (e) aplicará medidas para que los actores que intervienen en las cuencas las protejan,*

rehabiliten y compensen ambientalmente los impactos negativos que genere su intervención en el agua, considerando, entre otros, el efecto combinado de las intervenciones, los pasivos ambientales, la evacuación de aguas residuales y las particularidades de cada cuenca; (f) creará las condiciones para la sostenibilidad del reuso y reciclaje del agua residual previamente tratada, resguardando los ecosistemas y sus servicios ambientales así como la salud pública; (g) fortalecerá el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, su representación interinstitucional y la autonomía administrativa, económica y funcional de la Autoridad Nacional del Agua como ente rector, para que actúe como órgano autónomo especializado, con independencia y en forma desconcentrada, con participación de los gobiernos regionales y locales, las organizaciones de usuarios y demás actores de la gestión del agua, de diferente escala territorial; (h) impulsará el proceso de institucionalización de la gestión integrada a nivel de cuencas orientado hacia la conformación de Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca, sustentado en instrumentos e instancias técnicas refrendados por la Autoridad Nacional del Agua, con una visión compartida y articulada a los planes de desarrollo concertado nacional, regional y local y al ordenamiento territorial, en el marco de la normatividad vigente; (i) priorizará la prevención y gestión de controversias sobre el agua y temas afines, a través de las instancias desconcentradas y con participación activa de los usuarios. Un órgano autónomo especializado de la Autoridad Nacional del Agua resolverá las controversias, en última instancia administrativa. De ser el caso, aplicará las sanciones requeridas en el ejercicio de su soberanía sobre el recurso natural agua aplicando la normativa para un debido procedimiento; (j) fortalecerá la gestión integrada de recursos hídricos en cuencas transfronterizas, estableciendo acuerdos con los países limítrofes y apoyando a las organizaciones creadas para tal fin; (k) planificará y fomentará la inversión pública y privada en la captación y disponibilidad de agua, para: optimizar la eficiencia en el uso y reuso del agua, prevenir riesgos, mitigar los efectos de los eventos extremos, tratar los efluentes, así como para obtener futuras fuentes alternativas de agua, incluyendo la desalinización, para equilibrar y regular la oferta y demanda del agua para sus distintos usos; (l) garantizará la formalización de los derechos de uso del agua, y fortalecerá los mecanismos de planificación, gestión y financiamiento a fin de cubrir los costos de la gestión del agua, la recuperación de calidad de agua, la protección y ordenamiento de las cuencas, el control de riesgos de desastres, la fiscalización de usos y vertimientos, así como la construcción de infraestructura hidráulica, su operación y mantenimiento; (m) garantizará la investigación, recuperación, conservación y difusión de los conocimientos, tecnologías y organización tradicionales y ancestrales acumulados por los pueblos y comunidades amazónicas y andinas sobre la gestión de los recursos hídricos, promoviendo su compatibilización con el desarrollo tecnológico y de gestión; (n) impulsará la investigación, desarrollo e innovación y su difusión a través de la sinergia entre academia, empresa, Estado y otros en la gestión y aprovechamiento de los recursos hídricos, y mejorará las capacidades de los actores involucrados

en las diferentes escalas de intervención; y (o) garantizará la transparencia y el acceso a la información integral para los usuarios sobre la disponibilidad, calidad y gestión del agua, a través de la Autoridad Nacional del Agua."

Tal como se aprecia, el proyecto de ley para la regulación de la compensación a las comunidades campesinas y comunidades nativas por daños ambientales causados por la actividad minera y de hidrocarburos se relaciona estrechamente con la agenda legislativa y las políticas de Estado expresadas en el Acuerdo Nacional; ya que se busca promover el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente, garantizar la inclusión social y fomentar la participación ciudadana. Su implementación contribuirá a alcanzar los objetivos y compromisos del país en estas áreas.